

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RESOLUCIÓN “POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE, DECLARADAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 1814 DE 2015 Y PRORROGADAS MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 2157 DE 2017 Y 1987 DE 2018 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

1. Los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición.

La importancia del patrimonio biológico de Colombia, es expuesta ante el Convenio de Diversidad Biológica como substancial, porque alberga y desarrolla una significativa diversidad de especies y riqueza genética que aporta hoy día aproximadamente el 10% de la riqueza biológica global¹ y se ubica dentro del grupo de los 14 países que alberga el mayor índice de biodiversidad en la tierra².

El territorio colombiano ubicado en la franja tropical ecuatorial se integra en 212'974.800 hectáreas distribuidas en continente y áreas marinas; hace parte de la ecorregión marina del Caribe (suroeste caribeño) donde se concentra gran diversidad de especies marinas³, además, la influencia del mar Caribe, recibe la del océano Pacífico y la circulación atmosférica de la cuenca Amazónica, presenta características geográficas y orográficas que desencadenan e influyen en climas locales y regionales complejos y dinámicos que derivan una amplia variedad de ecosistemas que suministran bienes y servicios a los sectores productivos y están relacionados con modos de vida de comunidades humanas del país⁴

En términos generales a Colombia se le confiere un sistema rico y complejo de ecosistemas naturales de importancia global, base de su estatus como país megadiverso, que lo compromete a responsabilizarse del conocimiento de su patrimonio natural, la oferta ambiental, la identificación de amenazas que pesan sobre él⁵ y el desarrollo de gestión para su conservación.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Constitución Nacional de 1991, señaló entre los deberes ambientales del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

En este marco Colombia suscribió el Convenio sobre Diversidad Biológica aprobado mediante Ley 165 de 1994 en el que el País se compromete a establecer estrategias de conservación *in situ* de la diversidad biológica, entre las que sobresalen el establecimiento de áreas protegidas donde haya que tomar medidas especiales para su conservación, de la mano con la protección de ecosistemas, de hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones de especies en entornos naturales.

¹ Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A., & Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403(6772), 853-858. // González, M; García, H; Corzo, G; y Madriñán, S. (2012). Biodiversidad, conservación y desarrollo. Ecosistemas terrestres de Colombia y el mundo. Sánchez, M. y Madriñán, S (comp). Universidad de los Andes. Ediciones Uniandes, Bogotá. 67-113.

² Andrade-C., M. G. 2011a. Estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la interacción ambiente-política. *Rev. Acad. Colomb. Cienc.* 35 (137): 491-507, ISSN 0370-3908. En: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el Convenio de Diversidad Biológica. Bogotá, D.C., Colombia. 101 p

³ Miloslavich, P., Díaz, J. M., Klein, E., Alvarado, J. J., Díaz, C., Gobin, J., ... & Bastidas, A. C. (2010). Marine biodiversity in the Caribbean: regional estimates and distribution patterns. *PloS one*, 5(8), e11916.

⁴ MinAmbiente (2014)

⁵ González, M; García, H; Corzo, G; y Madriñán, S. (2012).

Dentro de los ejes temáticos y líneas estratégicas de la Política Nacional Para la Gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), que articula las dinámicas del país con las llamadas Metas Aichi 2011-2020, se encuentra el Eje I. “Biodiversidad, Conservación y Cuidado de la Naturaleza”, el cual hace referencia a la necesidad de adelantar acciones de conservación in situ y ex situ, tanto en áreas silvestres (protegidas o no) y paisajes transformados continentales, marinos, costeros e insulares, de manera que se mantengan poblaciones viables de flora y fauna, la resiliencia de los sistemas socioecológicos y se sustente el suministro de servicios ecosistémicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza.

Así mismo la sentencia T-154 de 2013, determinó que uno de los principios fundamentales del actual régimen constitucional es la obligación Estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 Carta Política/91), ecoge y determina, a manera de derechos colectivos, las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y la naturaleza. Dentro de las disposiciones constitucionales, se establece: (i) el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano; (ii) la obligación estatal y de todas las personas de proteger la diversidad e integridad del ambiente; (iii) la obligación del estado de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo sostenible; y (iv) la función ecológica de la propiedad”.

Frente a la protección de las áreas de especial importancia ecológica la Corte Constitucional ha señalado que tales zonas están sometidas a un régimen de protección más intenso que el resto del medio ambiente, pues en dichas áreas se alberga la diversidad biológica de nuestro país, la cual, de conformidad con los principios consagrados en la Ley 99 de 1993 por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

Bajo este marco, la misma Ley 99 de 1993 estableció las funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales se encuentra la de *“ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”*, bajo cuyo amparo, dichas autoridades, y conforme lo establecido por el Decreto 2372 de 2010 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) y la Resolución 1125 de 2015, se encuentran facultadas para adelantar procesos de declaratoria de áreas protegidas en el ámbito de su jurisdicción.

Es así como las Corporaciones Autónomas Regionales, con el apoyo de Parques Nacionales Naturales como coordinador del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, adelantó en 2014 un proceso de identificación conjunta del portafolio de sitios sobre los cuales se adelantaban estudios y los procedimientos para su declaratoria como áreas protegidas del nivel regional, con base en los cuales, este Ministerio expidió la Resolución 1814 de 2015, mediante la cual se declararon y delimitaron unas zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y se tomaron otras determinaciones.

Posteriormente, luego del vencimiento del término de vigencia de dicho acto administrativo y con base en los resultados del avance de los procesos de delimitación y declaración de los polígonos establecidos en la Resolución 1814 de 2015, adelantados por las Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, fue presentado a este Ministerio por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, un informe que daba cuenta de los resultados de la gestión llevada a cabo por dichas autoridades en la implementación de la ruta declaratoria sobre las mencionadas zonas de

protección y mediante diferentes espacios de trabajo desarrollados con la Autoridad Minera Nacional, en el marco del deber de colaboración, se llevó a cabo la prórroga del término de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente establecidas mediante la Resolución 1814 de 2015, a través de las Resoluciones 2157 de 2017 y 1987 de 2015.

No obstante, pese a que las autoridades ambientales regionales, avanzan en los procesos de declaratoria de área protegidas, de conformidad con lo establecido para la ruta declaratoria de áreas protegidas adoptada por este Ministerio mediante Resolución 1125 de mayo de 2015, así como lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia, este proceso de declaratoria comprende no solo la realización de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales sino procedimientos como la sustentación técnica de la iniciativa de conservación, la coordinación con las entidades de otros sectores con intereses en esos territorios, la socialización con actores sociales e institucionales y la colaboración con las autoridades sectoriales correspondientes, así como la consulta previa cuando a ello haya lugar; procedimientos que sin duda requieren tiempos considerables para su adecuado desarrollo.

Los procesos de declaratoria adelantados por las corporaciones autónomas regionales en las correspondientes zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales y del medio ambiente, se caracterizan por corresponder a áreas que se superponen en la actualidad con solicitudes de títulos mineros y además se traslapan en buena medida con áreas donde se constituyeron áreas mineras estratégicas, lo que da cuenta del interés creciente de realizar actividades mineras allí.

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que una de las razones para que la Constitución de 1991 reafirmara la propiedad del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables (artículo 332), es permitir el establecimiento de una serie de políticas de planificación dirigidas a la protección ambiental y de la biodiversidad, en armonía con el aprovechamiento de los recursos naturales (artículos 80 y 339).

Es así como la Ley 99 de 1993, adoptó los principios generales ambientales promulgados en la Declaración de Río de Janeiro, los cuales a partir de su incorporación en nuestro marco normativo tienen fuerza vinculante para el país, entre los que se encuentra el principio de precaución, desarrollado de la siguiente manera: *“la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”*

Este principio general ambiental, impone a las autoridades administrativas no solo una potestad sino el deber de adoptar las medidas eficaces para la protección del medio ambiente, cuando existan indicios o se evidencie científicamente un peligro de daño grave e irreversible sobre los valores naturales y el interés colectivo. En estos casos, la falta de certeza absoluta sobre el daño no podrá ser utilizada como razón para no adoptar las medidas encaminadas a impedir la degradación del ambiente.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-339 de 2002, sobre la constitucionalidad del artículo 34 de la Ley 685 de 2001, de manera específica se refiere al deber de las autoridades administrativas de aplicar el principio de precaución como condición de constitucionalidad para dar aplicación al inciso 3

de la citada norma, que establece la necesidad de motivar el acto que declara las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables, en estudios que determinen la incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras, como condición para excluirse o restringirse allí trabajos y obras de exploración y explotación mineras.

En palabras de la misma corte, *“en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección del medio ambiente **pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias**”*

Esta condición de constitucionalidad resulta ser una exigencia para que las autoridades administrativas, apliquen el principio de precaución frente al desarrollo de actividades mineras, al momento de declarar zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales, ante la presencia de todos los presupuestos exigidos por el citado principio.

La Corte Constitucional en Sentencia C-293 de 2002 declaró constitucional el principio de precaución contenido en la Ley 99 de 1993 y estableció que la autoridad ambiental es competente para aplicarlo, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse *“un peligro de daño, que éste sea grave e irreversible, que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta, que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente”*.

De acuerdo con el marco normativo colombiano, resultan ser el estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental los instrumentos administrativos que permiten evaluar previamente los impactos potenciales y establecer en esa medida, las medidas ambientales para prevenir, mitigar, corregir o compensar los daños ambientales que pueda generar una explotación minera en particular.

No obstante lo anterior, dicha evaluación no se realiza para la etapa de exploración minera, que en zonas de especial importancia ecológica, como son las zonas de protección mencionadas anteriormente y en las cuales se adelantan los procesos para su declaratoria como áreas del SINAP, pueden generar impactos ambientales graves e irreversibles, sobre los cuales no se tendría certeza al momento de autorizar su desarrollo por parte de la Agencia Nacional de Minería, lo que incluso podrían alterar su condición de naturalidad o buen estado de conservación.

Con base en lo anterior, es importante resaltar entonces que la protección del medio ambiente es uno de los más importantes cometidos estatales, ya que la constitucionalización del concepto de desarrollo sostenible obliga a pensar en los derechos de las generaciones futuras, la conservación del ambiente, la preservación de los recursos naturales y de las áreas de especial importancia ecológica. Sin embargo, tales derechos y deberes constitucionales representados en los valores naturales de estas áreas, se encuentra en peligro frente a la posibilidad de realizar actividades mineras sin que previamente se hayan evaluado particularmente sus impactos y al mismo tiempo sin que hayan concluido los procedimientos para su protección definitiva, puesto que la realización de este tipo de actividades puede conllevar a daños irreversibles en aquellas zonas que debieron ser objeto de una protección especial.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y partiendo de la premisa de que el principio de precaución exige una *“postura activa de anticipación, con un objetivo de previsión de la futura situación medioambiental*

a efectos de optimizar el entorno de vida natural”, es necesario tomar y mantener medidas de carácter excepcional que permitan proteger transitoriamente la diversidad biológica allí presente, del peligro inminente a las que se vería avocada por el desarrollo de actividades mineras sin evaluación ambiental previa, mientras que se surte todo el proceso administrativo de declaratoria específica y definitiva por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales

Por todo lo anterior, resulta necesario tomar desde este ministerio una medida administrativa para que la autoridad minera nacional no autorice nuevas concesiones mineras que amparen actividades mineras de explotación, sin evaluación ambiental previa.

Así, sin perjuicio de adelantar los procedimientos para su declaratoria como áreas del SINAP, los cuales deberán atender a lo previsto en las normas legales y reglamentarias, así como en la Resolución 1125 de mayo de 2015, este Ministerio en virtud del principio de precaución deberá adoptar medidas excepcionales y provisionales, que impidan la degradación del medio ambiente en estas áreas.

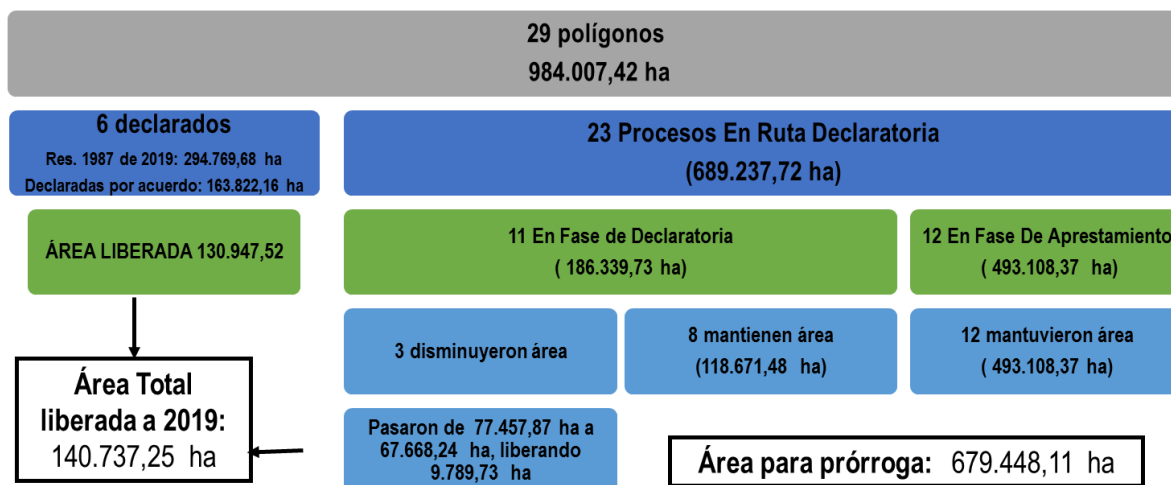
La Corte constitucional en la Sentencia T-299 de 2008, resaltó el “enfoque excepcional de las decisiones tomadas en virtud del principio de precaución indicando que éstas tienen siempre el carácter de provisionales, pues el enfoque de precaución no prevalece sobre la certeza científica de profundizar en las investigaciones, y no un límite a las mismas”

Bajo el anterior contexto, las áreas definidas como zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de interés regional, corresponden a zonas que albergan algunos de los ecosistemas que a la fecha no se encuentran representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), las cuales contribuyen a la conservación de la diversidad biológica y a garantizar la oferta de servicios ecosistémicos que hacen posible el desarrollo productivo del país y el bienestar de la sociedad, ya que poseen ecosistemas estratégicos para la conservación de especies animales, vegetales y otras formas de vida, manteniendo hábitats claves, refugios, espacios de migración, zonas de desplazamiento y áreas de conexión entre unidades biogeográficas, entre otras.

La aplicación de la ruta para la declaratoria de un área protegida se sustenta en criterios biofísicos, sociales, económicos y culturales que permitan visualizar la oportunidad y necesidad de declarar una nueva área protegida en un territorio determinado, con el fin de fortalecer las metas de conservación del país y garantizar el mantenimiento de la base natural que sustenta los servicios ecosistémicos necesarios para la pervivencia de las generaciones actuales y futuras.

De acuerdo a lo informado por parte de las autoridades ambientales regionales a este Ministerio, en respuesta a la solicitud adelantada a través de oficios con radicado No. 8201-2-1987 del 28 de agosto de 2019, se identifican los siguientes avances a la fecha:

Resolución 1987 de 2018



Es importante resaltar, que cada uno de los procesos de declaratoria han contado con la vinculación de diferentes actores de tipo institucional, sectorial y comunitario, claves para asegurar el éxito en la declaratoria de un área protegida, atendiendo lo dispuesto al respecto en la Resolución 1125 de 2015 (ruta para la declaratoria de áreas protegidas públicas).

De manera más detallada a partir de análisis adelantado en conjunto por parte de este Ministerio y Parques Nacionales Naturales, se tienen los siguientes resultados y avances en la ruta declaratoria, en cada una de las zonas de protección contenidas en la Resolución 1987 de 2018⁶:

⁶ Se anexan las fichas técnicas de cada proceso allegadas por las corporaciones a este Ministerio.

Tabla 1. Análisis del avance en los procesos de declaratoria de áreas protegidas en las zonas de protección.

Fase de la ruta		Polígono número	Corporación	Nombre del área	Área 2157	Área 1987	Área actual	Área liberada a 2019	Requiere consulta previa	
EN 1987	Actualmente								SI	NO
Aprestamiento	Aprestamiento	8	Corantioquia	Bajo Cauca_Nechi	89.181,48	89.181,48	89.181,48	-		X
Aprestamiento		15	Corantioquia	Bosque seco tropical	44.116,32	74.596,96	74.596,96	-	X	
Aprestamiento		24	Corponor	Reserva Forestal Protectora Jurisdicciones	9.723,88	9.723,88	9.723,88	-		
Aprestamiento		37	Corponor	Cerro Tasajero	5.943,17	5.943,17	5.943,17	-		
Aprestamiento		40	Corponor	PNR Almorzadero este	31.368,23	31.368,23	31.368,23	-		
Aprestamiento		14	Corporinoquia	Cerro Zamaricote	14.395,14	14.395,14	14.395,14	-		X
Aprestamiento		23	Corpourabá	DMRI Zona Norte	174.205,41	174.205,41	174.205,41	-		
Aprestamiento		46	CDMB	Zona Árida Cañón Río Chicamocha	9.730,53	9.730,53	9.730,53	-		
Aprestamiento		47	CDMB	Cañón Río Lebrija	3.919,91	3.919,91	3.919,91	-		
Aprestamiento		49	CDMB	Área protegida microcuenca Río Tona	11.631,54	11.631,54	11.631,54	-		
Aprestamiento		3	Codechocó	Relictos de Caoba de Jurado	66.954,77	66.954,77	66.954,77	-		
Aprestamiento		17	Cortolima	Los Limones	1.457,36	1.457,36	1.457,36	-		
Subtotal fase aprestamiento					462.627,74	493.108,38	493.108,38			
Declaratoria	Declaratoria	5	Corantioquia	Humedal_el_Sapo 2	12.895,36	12.895,36	12.895,36	-		X
Declaratoria		11	Corpocaldas	Área Corozal	1.189,77	1.189,77	1.189,77	-		X
Declaratoria		22	Corpourabá	Peque	29.765,00	21.126,76	20.428,50	698,26		X
Declaratoria		21	Corpourabá	DMRI Humedales Serranía Abibe	140.728,34	41.732,54	41.732,54	-		X
Declaratoria		54	CVC	Serranía de Los Paraguas	39.901,24	39.901,24	39.791,78	109,46	X	
Aprestamiento		25	Corponor	DMI Bosque Seco Tropical Sur	16.429,87	16.429,87	7.447,96	8.981,91		X
Declaratoria		48	CDMB	Bosques El Aburrido Honduras	2.112,43	2.112,43	2.112,43	-		
Declaratoria		41	Corpogujaira	Bahía Honda – Hondita	36.695,25	36.695,25	36.695,25	-		
Declaratoria		50	Corponariño	Cerro Chimayoy	3.287,66	3.287,66	3.287,66	-		
Declaratoria		52	Corponariño	Enclave suxerofítico del Patía	1.309,91	1.309,91	1.309,91	-		
Declaratoria		51	Corponariño	Andino Pacifica	37.008,46	19.448,57	19.448,57	-		
Subtotal fase declaratoria					321.323,29	196.129,36	186.339,73	9.789,63		

Fase de la ruta		Polígono número	Corporación	Nombre del área	Área 2157	Área 1987	Área actual	Área liberada a 2019	Requiere consulta previa	
EN 1987	Actualmente								SI	NO
Aprestamiento	Ya declarado	45	Corpoamazonia	Piedemonte – Páramos – Bosque de niebla	216.812,88	216.812,88	106.554,00	110.258,88		X
Declaratoria		44	Cormacarena	Bosque de Los Guayupes	38.547,41	18.218,63	18.218,63	-		X
Declaratoria		9	Corpocaldas	Bosque del Gigante	296,03	729,1	729,1	-		
Declaratoria		12	Corpochivor	Propuesta Cuchilla el Varal	5.705,88	3.390,57	3.390,57	-		X
Aprestamiento		34	Corponor	Mejue	10.703,73	10.703,73	10.651,36	52,37		
Declaratoria		56	CVC	Reserva Natural Rio Bravo	44.914,77	44.914,77	24.278,50	20.636,27		X
Subtotal ya declarados					716.605,27	551.640,43	410.903,28	130.947,52		
Total área prorroga							679.448,11			
Total área liberada								140.737,15		

De las áreas ya declaradas se tiene la siguiente información:

Tabla 2. Información de las áreas ya declaradas

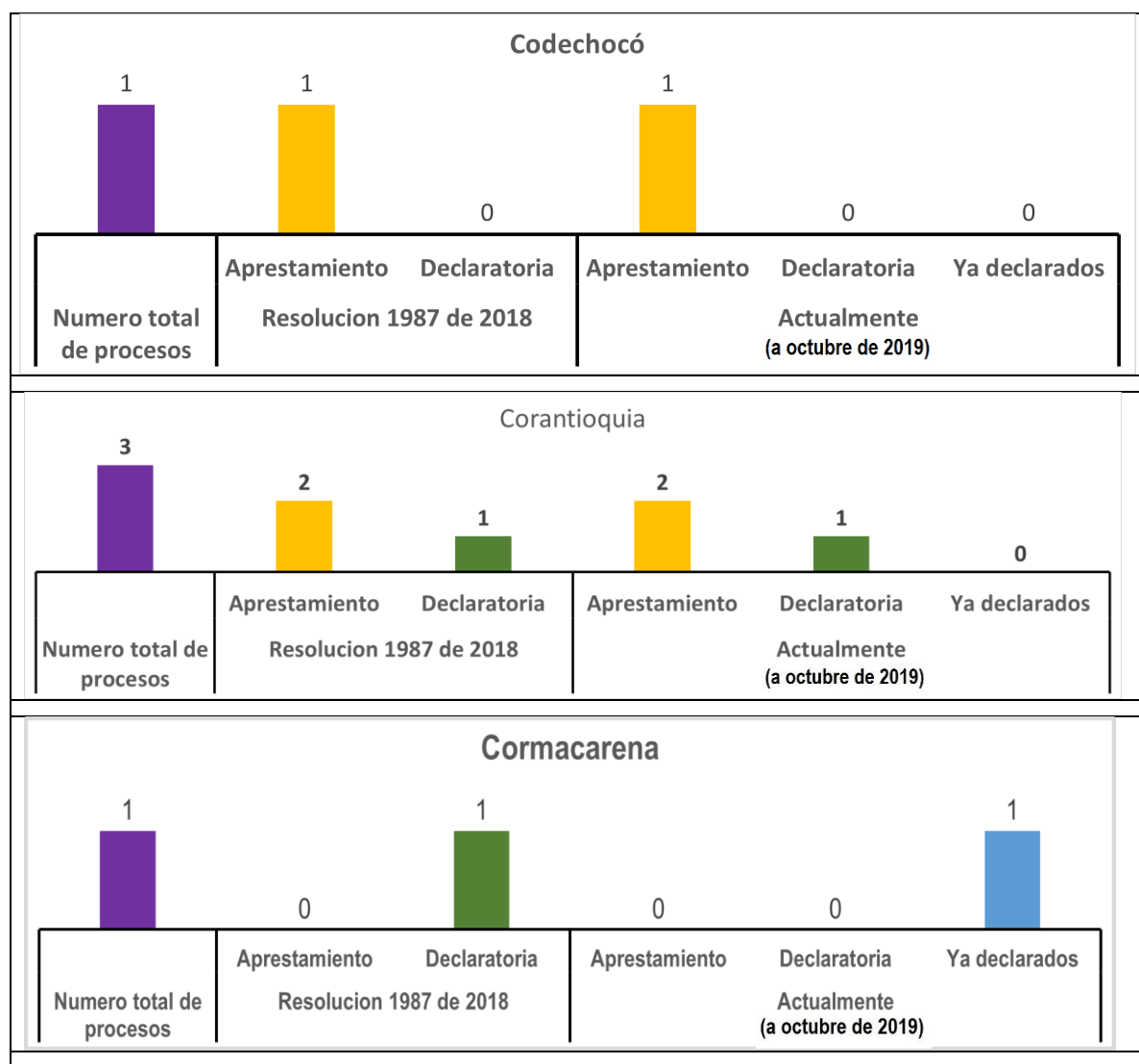
No. Del polígono	Corporación	Nombre del área	Categoría	Información de declaratoria	Registrada en RUNAP
45	Corpoamazonia	Piedemonte - Páramos - Bosque de niebla-	Parque Natural Regional	Declarada por el Acuerdo No. 14 de diciembre de 2018	SI
44	Cormacarena	Bosque de Los Guayupes	Parque Natural Regional	Declarado mediante ACUERDO No. PS-GJ.1.2.42.2.18. 012. Del 13 de diciembre de 018	SI
9	Corpocaldas	Bosque del Gigante	Distrito de Conservación de Suelos	Durante el año 2018 se avanzó en el proceso de declaratoria del Distrito de Conservación de Suelos DCS El Gigante ubicado en el municipio de Salamina, siendo declarado por el Consejo Directivo de CORPOCALDAS, mediante Acuerdo 23 del 2019 el día 5 de septiembre de 2019.	EN PROCESO
12	Corpochivor	Propuesta Cuchilla el Varal	Distrito Regional de Manejo Integrado	Declarado por Acuerdo 003 de enero de 2019	SI
34	Corponor	Mejue	Distrito Regional de Manejo Integrado	El área fue declarada en diciembre de 2018 como Distrito Regional de Manejo Integrado Mejue, el cual comprende un área de 10651, 36 hectáreas. El DRMI ya se encuentra	S

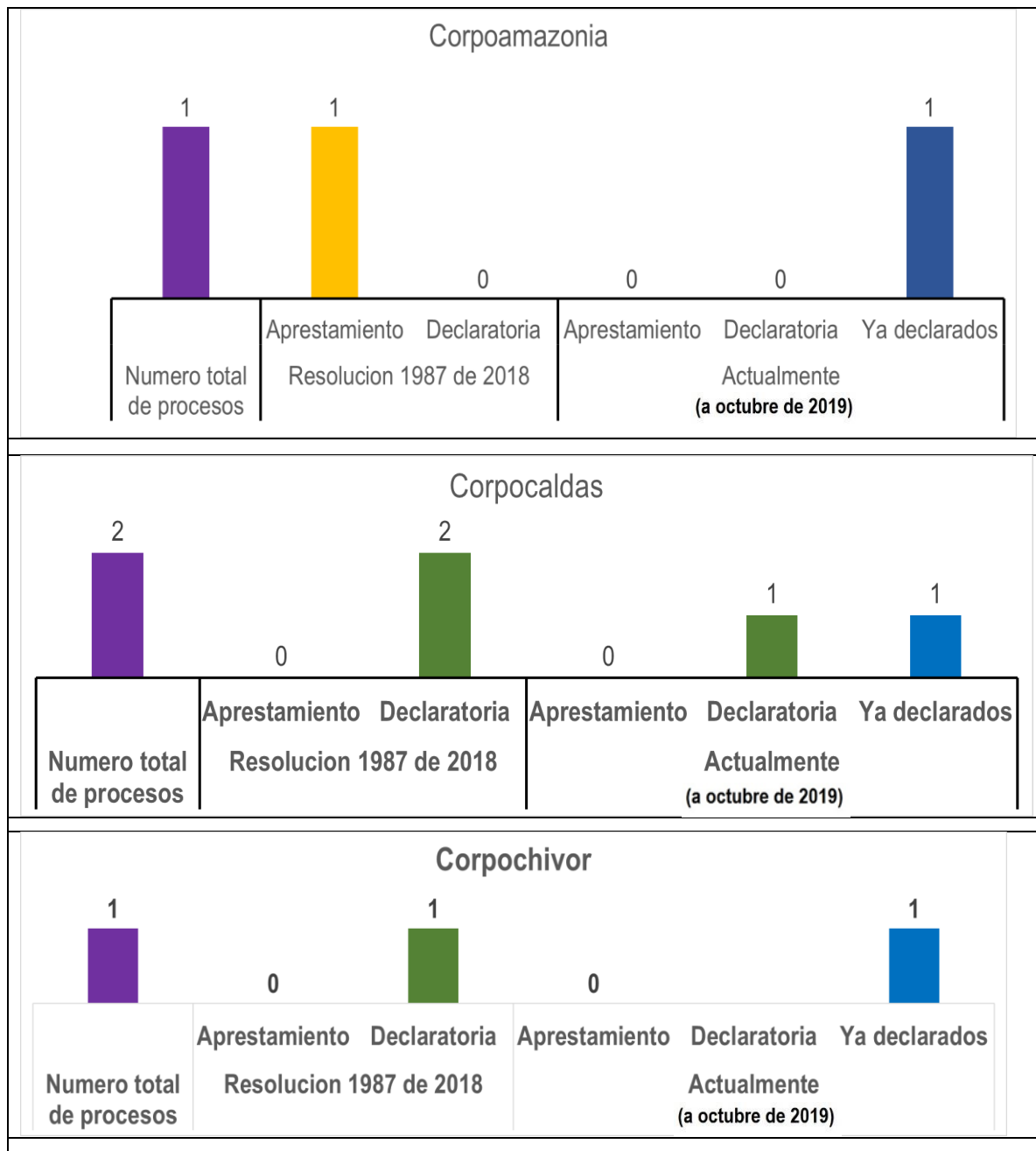
				debidamente inscrito en el RUNAP y se avanza actualmente en la formulación de su Plan de Manejo Ambiental. Acuerdo	
56	CVC	Reserva Natural Rio Bravo	Reserva Forestal Protectoras Regional	RFPR Rio bravo proceso ya concluido en la declaratoria (se adjuntan formato diligenciado, Acuerdo 069 de diciembre 2018 por el cual se declara el área protegida, polígono declarado en formato shape, actores del área en formato Excel)	SI

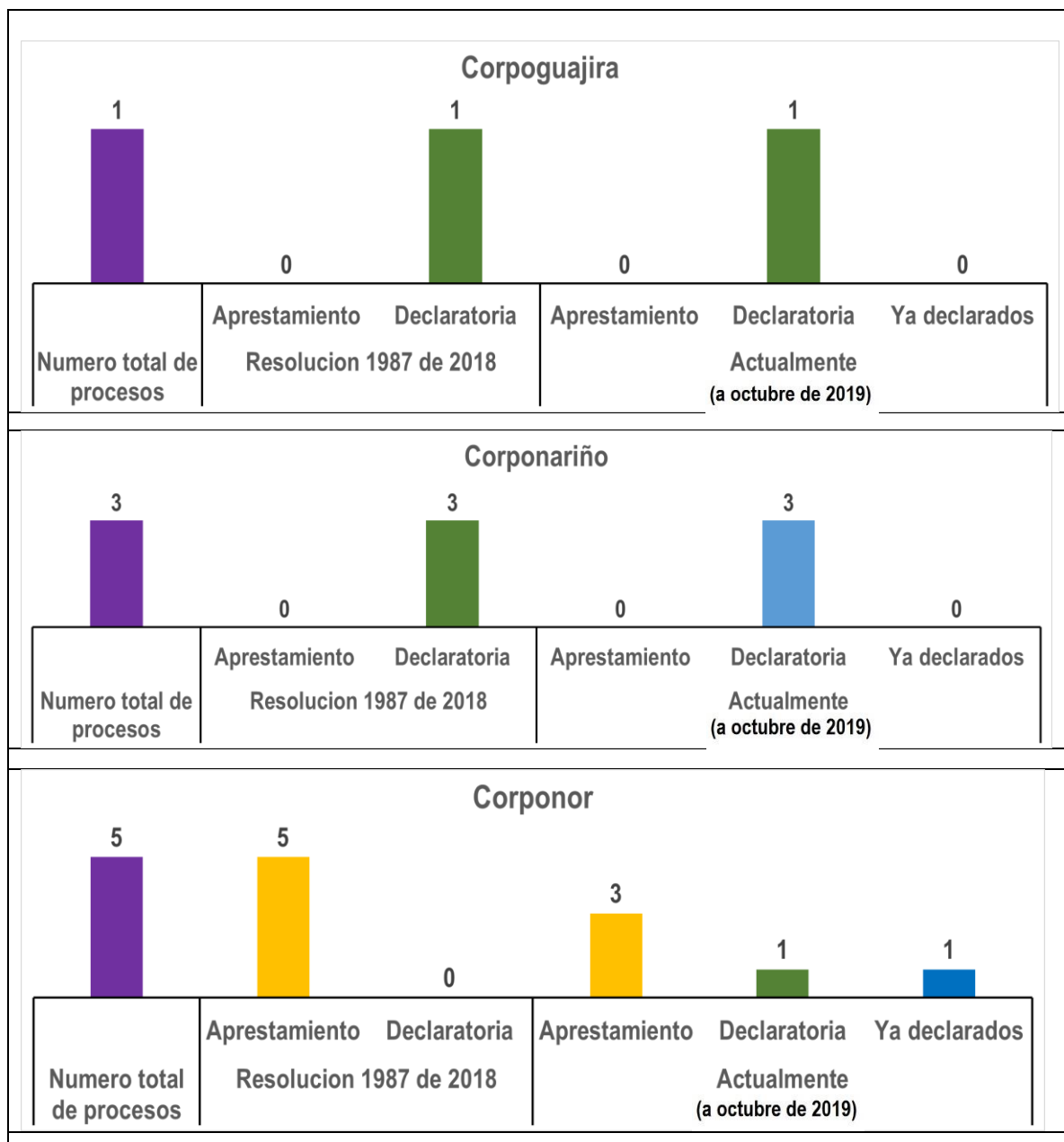


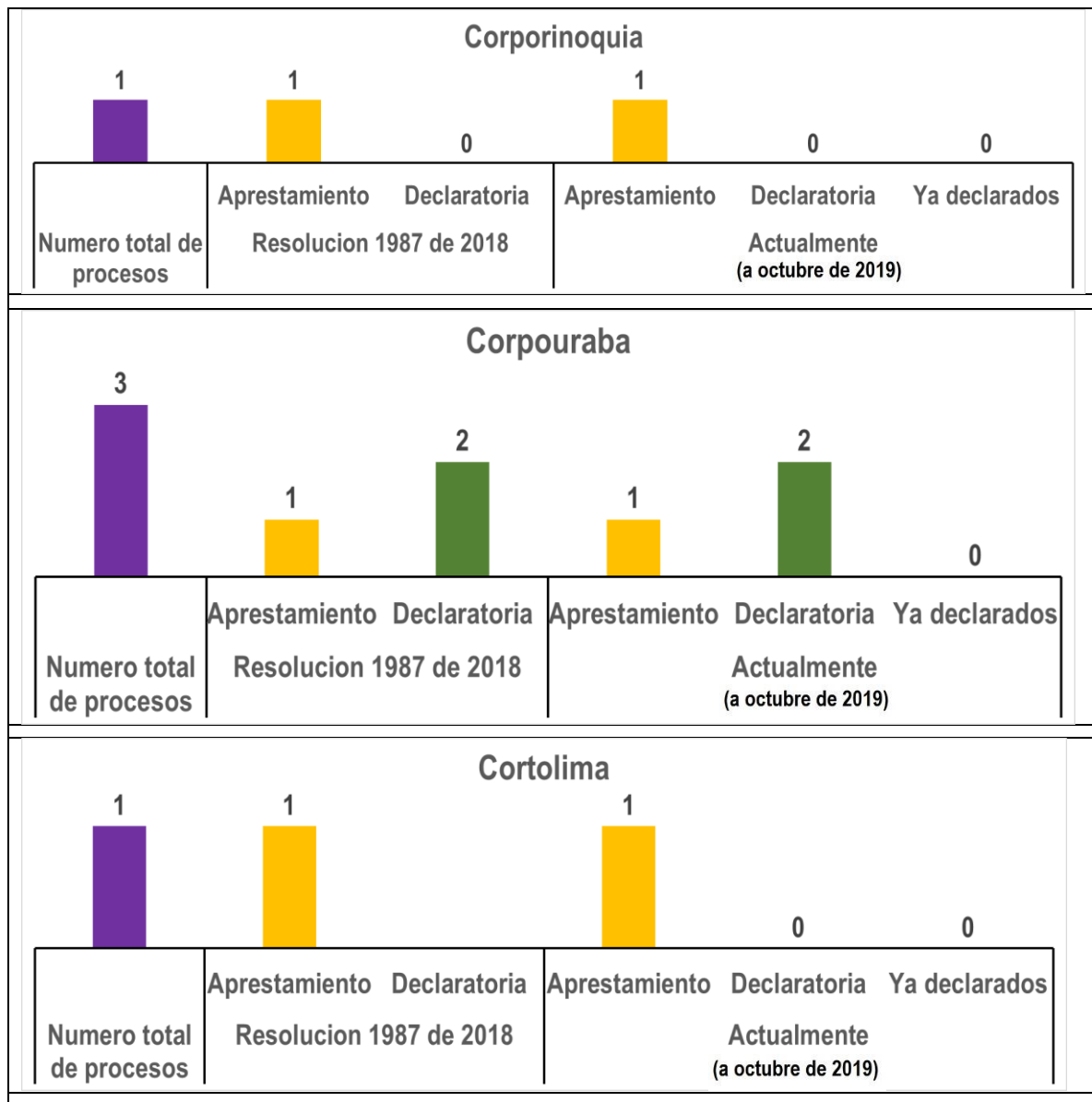
De manera más ilustrativa, a continuación, se presenta una comparación del comportamiento de los procesos de declaratoria de cada una de las Corporaciones que cuentan con áreas dentro de las denominadas zonas de protección, evidenciándose cuales de ellas llevaron culminaron la ruta y adelantaron la correspondiente declaratoria de áreas protegidas.

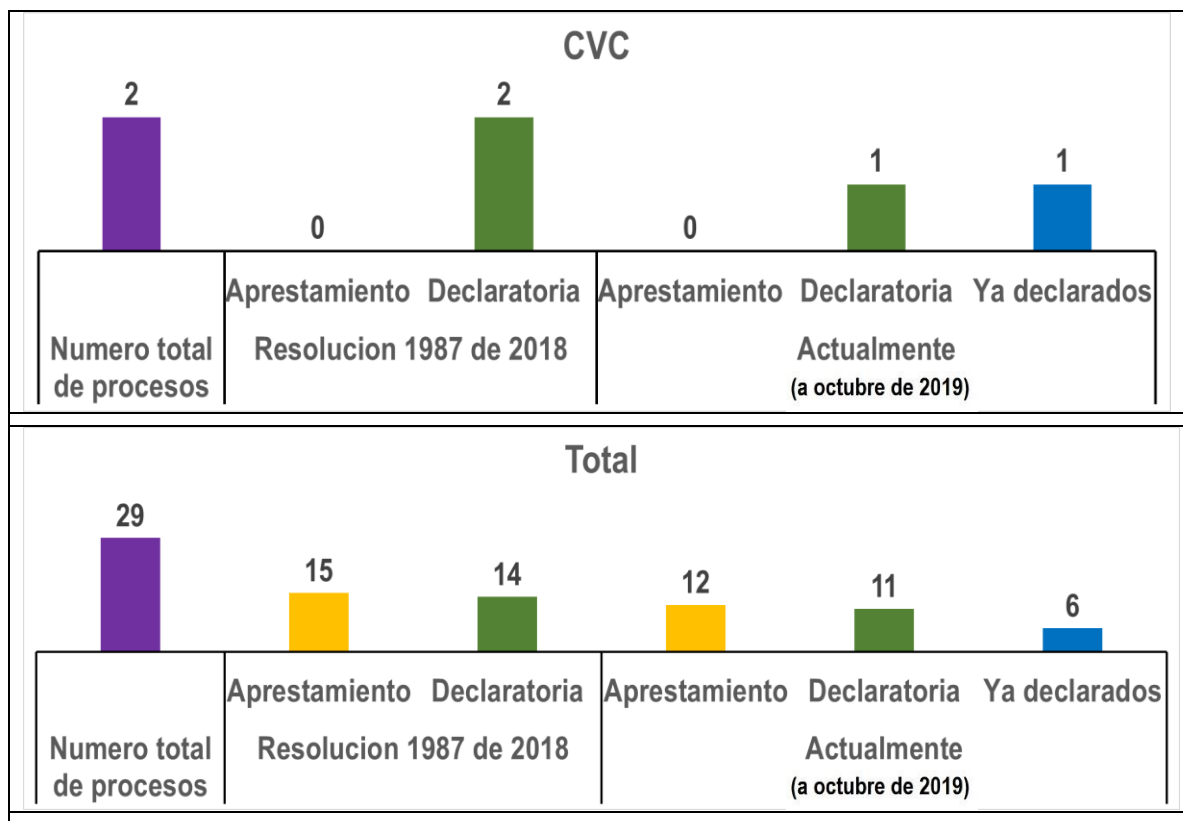
Es relevante señalar que, si bien algunos procesos se mantienen en la misma fase entre 2018 y 2019, esto no debe interpretarse como un estancamiento en el proceso, puesto que, tal como lo señala la Resolución 1125 de 2015, estas fases contienen varios componentes que pueden iniciarse en cualquier momento, pueden llevarse a cabo de manera paralela o incluso en algunos casos pueden obviarse algunos, de no considerarse necesarios en el desarrollo de la ruta.











De nuevo es importante resaltar que si bien hay procesos que se han mantenido entre 2018 y 2019 en una misma fase de la ruta, obedece al hecho de que cada uno corresponde a un proceso particular y sujeto a las dinámicas particulares de cada territorio. Lo anterior en clara consonancia con lo establecido para la ruta declaratoria de áreas protegidas, adoptada por este Ministerio mediante Resolución 1125 de 2015, en la cual se establece que el proceso de declaratoria de un área protegida comprende no sólo la realización de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, sino también el relacionamiento y generación de acuerdos con otras entidades, con otros sectores y con todos los actores con intereses y presencia en esos territorios, y de igual manera la realización de la consulta previa cuando a ello haya lugar, procedimientos que sin duda requieren tiempos considerables para su adecuado desarrollo.

Finalmente, se resalta que de las 23 áreas que aún se encuentran en proceso de implementación de la ruta, tres (3) de ellas y como resultado efectivamente de la aplicación de la misma, han sufrido un ajuste ya sea en su extensión, en su diseño o en ambas.

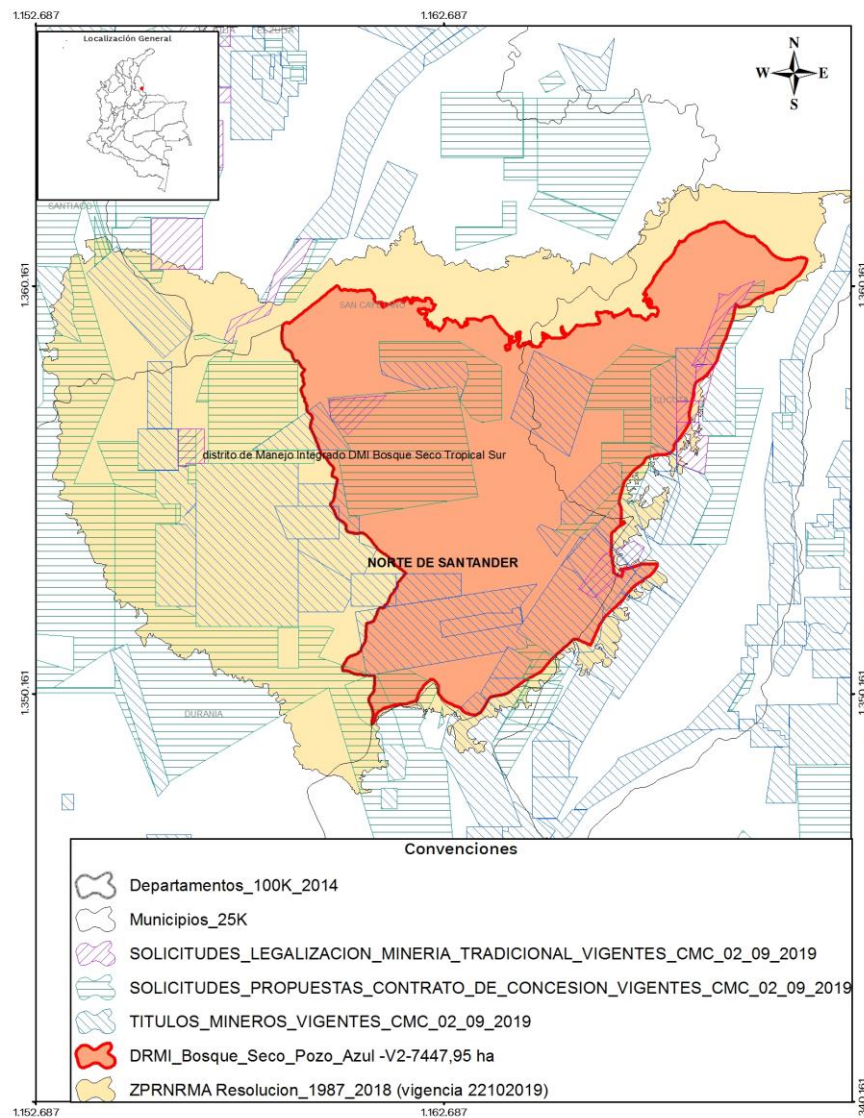
Es importante resaltar que el ajuste de área en los tres (3) casos corresponde a una reducción de esta, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla y figuras:



Tabla 2. Área que reducen sus áreas.

Polígono número	Nombre del área	Corporación	Área (ha)		
			Área Resolución 1987 de 2018	Área actual	Área liberada
22	Peque	Corpourabá	21.126,76	20.428,50	698,26
54	Serranía de Los Paraguas	CVC	39.901,24	39.791,78	109,46
25	DMI Bosque Seco Tropical Sur	Corponor	16.429,87	7.447,96	8.981,91
Total			77.457,87	67.668,24	9.789,63

Figura 1. Polígono 25 Bosque Seco tropical Sur - CORPONOR





Teniendo en cuenta el significativo cambio que presenta esta área del polígono original de la zona de protección contenidas en la Resolución 1987 de 2015, frente al diseño actual del polígono sobre el cual la corporación adelantaría la declaratoria de un área protegida, se anexa al presente documento una ficha técnica que describe en detalle las razones que expresa la corporación, para sustentar dicho diseño final del polígono (anexo 1). El anexo en mención constituye parte integral de este documento, junto con la cartografía digital en formato shape, que contiene las áreas que serían incluidas en la eventual prórroga de la resolución en mención.

Figura 2. Polígono 22 Peque - CORPOURABA

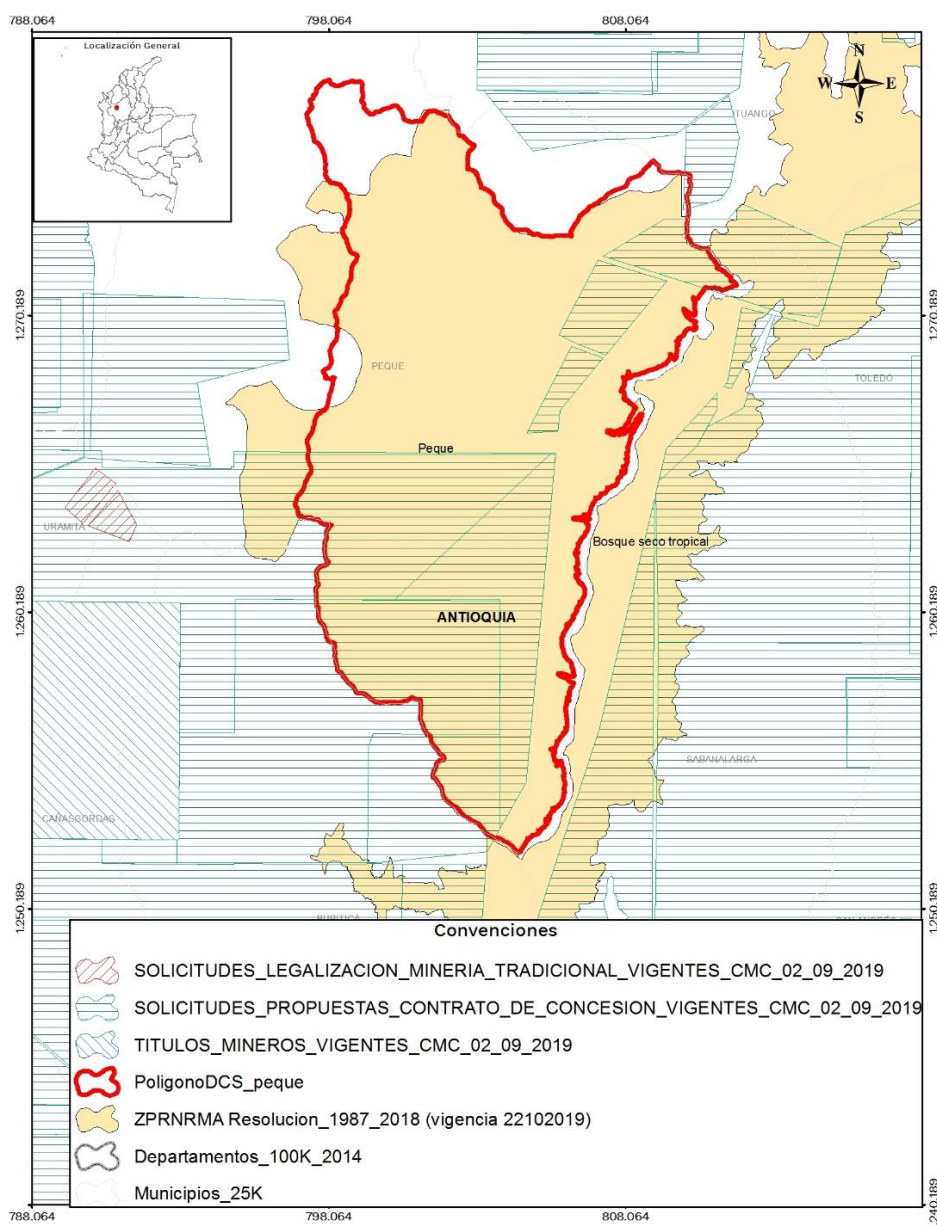
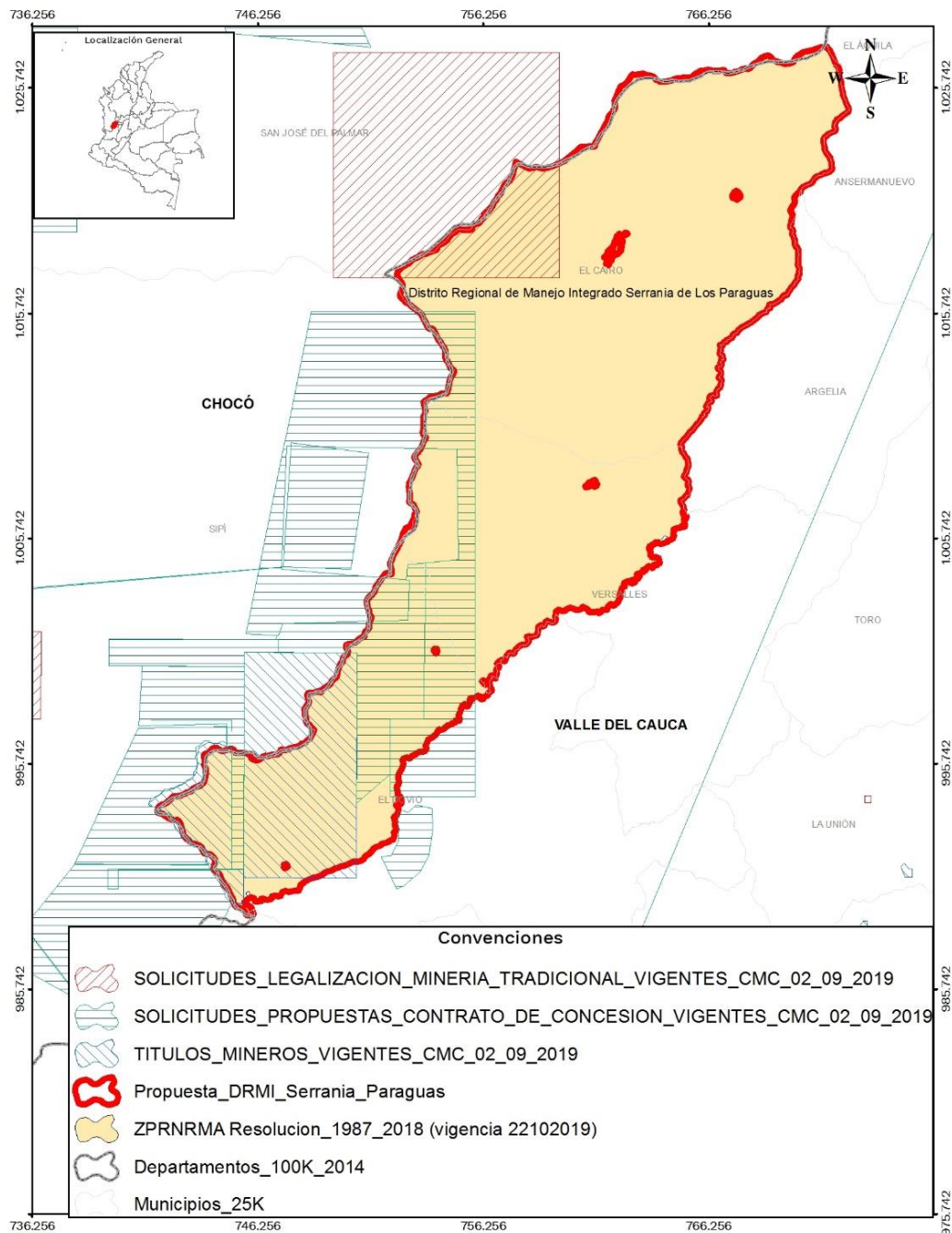




Figura 3. Polígono 54 Serranía de Paraguas - CVC





2. Necesidad de una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente

Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar que si bien han existido significativos avances en la implementación de la ruta declaratoria para cada una de las zonas de protección de interés regional, este proceso, conforme lo establecido en la Resolución 1125 de 2015 comprende el desarrollo de tres fases denominadas de preparación, aprestamiento y declaratoria, en el marco de las cuales deben adelantarse estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, así como desarrollar actividades como la preparación y sustentación de un documento síntesis que consolide la propuesta de declaratoria, el cual debe ser presentado para la emisión de un concepto técnico, ante alguno de los institutos de investigación adscritos al Ministerio de Ambiente, conforme los ámbitos de jurisdicción de los mismos.

De igual manera, se debe llevar a cabo a lo largo de toda la ruta declaratoria, procesos de relacionamiento y coordinación a que haya lugar con las demás entidades y autoridades de otros sectores con intereses en esos territorios, así como con los demás actores sociales e institucionales que se encuentren en el territorio; procedimientos cuyo desarrollo se encuentra sujeto a las dinámicas propias de cada área y que en conjunto requieren tiempos considerables para su adecuado desarrollo.

Por lo cual, aún con los avances en la aplicación de la ruta que se han llevado a cabo en las mencionadas zonas de protección, existen algunas dificultades que dilatan el proceso y existen acciones que se hace necesario adelantar para lograr la consolidación de las figuras de conservación que garanticen la protección de los valores naturales y culturales presentes en los territorios que comprenden dichas figuras de protección, de entre las cuales para cada uno de los procesos y a partir de la información reportada por las autoridades ambientales regionales, se destacan:

Tabla 3. Análisis de las condiciones particulares de cada proceso.

Polígono número	Corporación	Nombre del área	Dificultades y pasos a seguir
8	Corantioquia	Bajo Cauca_Nechi	<ul style="list-style-type: none">• Concretar las concertaciones con las comunidades sociales asentadas en el territorio.• Existe una situación que ha complejizado el desarrollo del proceso que se relaciona con la problemática social de la zona.• Se está afinando la declaratoria con talleres de enfoque para general evidencias y así poder llevar al Consejo Directivo de Corantioquia para su declaración. Seguir con la socialización con las comunidades asentadas en el polígono para cerrar la ruta en la mesa de bosques.
15	Corantioquia	Bosque seco tropical	<ul style="list-style-type: none">• La aplicación de la ruta declaratoria en estas áreas ha llevado a encontrar nueva información que repercutido en una prolongación del tiempo para efectuar la terminación de los documentos técnicos jurídicos, dado que se hizo necesario realizar acciones complementarias como la apropiación y concertación con comunidades étnicas, el fortalecimiento de los ejercicios de participación activa de actores relevante; además, considerando los tiempos de las respectivas consultas ante las entidades de interés, referentes a la existencia o no de Licencias Ambientales para explotación de los recursos naturales, presencia de comunidades étnicas y el estado de proyectos viales y de conexión eléctrica entre otras.
24	Corponor	Reserva Forestal	<ul style="list-style-type: none">• El área se encuentra adyacente a otras dos figuras que son la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta Río Algodonal y el Páramo Jurisdicciones- Santurbán- Berlín, por lo



Polígono número	Corporación	Nombre del área	Dificultades y pasos a seguir
		Protectora Jurisdicciones	cual el manejo del proceso requiere resolver situaciones que la comunidad reclama frente a esas otras dos estrategias, como es la situación de las actividades agropecuarias y el conflicto que existe por la afectación de predios de la reserva que se realizó ante la oficina de registro.
37	Corporonor	Cerro Tasajero	<ul style="list-style-type: none">El proceso demanda un trabajo riguroso y que implica considerable tiempo, pues en esta área, al igual que sucede en el área de Bosque Seco Pozo Azul, se localizan múltiples títulos y solicitudes mineras.
40	Corporonor	PNR Almorzadero este	<ul style="list-style-type: none">El área presenta superposición con la delimitación del Páramo de Almorzadero, Resolución 152 de 2018 del Ministerio de Ambiente, frente a la cual, la alta inconformidad de las personas genera grandes conflictos en torno a una nueva figura jurídica para el área, la cual se propone como parque natural.
14	Corporinoquia	Cerro Zamaricote	<ul style="list-style-type: none">Con respecto al avance del proceso de declaratoria del Cerro Zamaricote es necesario aclarar que este se encuentra suspendido debido a que las comunidades han expresado su inconformismo con la presencia de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, condicionando a la Corporación a garantizar el no licenciamiento de proyectos en el área, para lo cual es necesario que a través de un acto administrativo la Corporación garantice la no presencia de actividades petroleras.Es importante tener en cuenta que la solicitud realizada por las comunidades no puede ser atendida por la Corporación dado que no es la autoridad competente para licenciar esta clase de proyectos.Por otro lado el municipio de Pore ha solicitado la modificación del polígono, dado que el perímetro urbano del municipio se encuentra ubicado dentro del área a proteger, polígono establecido por la ordenanza de la Gobernación del Casanare.Por último las comunidades se oponen a la declaratoria por temor al régimen de usos que conlleva la categoría propuesta como reserva Forestal Protectora. Dado lo anterior el proceso de declaratoria se encuentra suspendido.
23	Corpouraba	DMRI Zona Norte	<ul style="list-style-type: none">Después de desarrollados los componentes que hacen parte de las fases de preparación y aprestamiento de la ruta declaratoria para el proceso denominado Zona Norte (polígono 23), se concluye que el polígono propuesto no presenta un grado de naturalidad aceptable, posee grandes intervenciones en la composición, estructura y función de los ecosistemas y después de haber realizado el análisis de integridad de los ecosistemas para los periodos 2002 – 2007 y 2007 – 2012 los diez indicadores resultan ser no deseables, finalmente el grado de conectividad estructural se encuentra en un 91% entre los rangos de conectividad media, baja y muy baja.Dadas las iniciativas de conservación del relicto de bosque seco tropical y recurso hídrico identificas por CORPOURABA y bajo las diferentes herramientas de ordenamiento con que cuenta el territorio se sugiere evaluar otras estrategias de conservación encaminadas a constituir figuras de reservas naturales de la sociedad civil y actualización de la zonificación ambiental del POMCA del Río San Juan, esto con el propósito de orientar y consolidar la propuesta de objetivos de conservación desarrollada para el área de referencia y concertada con actores sociales e institucionales
5	Corantioquia	Humedal_el_Sapo 2	<ul style="list-style-type: none">Ya se tiene concepto de Humboldt, se viene ejecutando el convenio 040-COV1812-129 suscrito con Fundación Natura Colombia que dentro de sus alcances esta al de adelantar concertación con cuatro comunidades étnicas que tiene incidencia en el polígono final. Lo anterior, ha llevado que en este polígono se tenga que adelantar un proceso adicional en la ruta declaratoria, la cual está en un avance del 50%, con una estimación de terminar para octubre de 2019 y luego llevar en noviembre al consejo Directivo de Corantioquia para su declaración.
11	Corpocaldas	Area Corozal	<ul style="list-style-type: none">En lo que respecta al proceso de declaratoria del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Corozal, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la Resolución 1125 de 2015 sobre la ruta de declaratoria, se avanzó en la consolidación de los procesos con las



Polígono número	Corporación	Nombre del área	Dificultades y pasos a seguir
			comunidades de la zona, relacionados con definición de objetivos, categoría propuesta y acciones estratégicas priorizadas.
22	Corpouraba	Peque	<ul style="list-style-type: none">Se espera iniciar proceso de gestión ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt para la generación del Concepto Previo Favorable para finales de septiembre.Una vez obtenido el concepto previo favorable, se procederá a elaborar y presentar el Acuerdo del consejo Directivo para la aprobación del área protegida, y de esta forma dar inicio a la realización de la zonificación y elaboración del plan de manejo
21	Corpouraba	DMRI Humedales Serranía Abibe	<ul style="list-style-type: none">Se toma como dificultad título minero para carbón en sector de nacimientos de los ríos que nacen en la serranía de Abibe, sin explotar y sin licencia ambiental, por lo cual se requiere adelantar un proceso de análisis minucioso. Gestión ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt para la generación del Concepto Previo Favorable para finales de septiembre. Elaboración de Acuerdo del Consejo Directivo para la aprobación del área protegida.
54	CVC	Serranía de Los Paraguas	<ul style="list-style-type: none">El proceso ya surtió la etapa de preparación y aprestamiento, incluida la protocolización de acuerdos de la consulta previa con dos comunidades indígenas presentes en la zona. Está pendiente el envío del Documento síntesis al IAVH para continuar el trámite ante Consejo Directivo de la CVC.Se espera poder presentar la propuesta de declaratoria al Consejo Directivo de la CVC entre Noviembre y Diciembre de 2019, una vez se tenga el concepto previo favorable por parte del IAvH.
25	Corponor	DMI Bosque Seco Tropical Sur	<ul style="list-style-type: none">La figura propuesta consiste en un DRMI con polígonos internos o adyacentes de títulos /solicitudes mineras que se vincularán a la conservación mediante acuerdos ha tomado tiempo consolidar la información y unificar los compromisos para los mismos.En el área existe problemática de escasez de agua que dificulta la realización de actividades en territorio pues se identifica a la corporación como responsable de la situación, lo cual dificulta comunicación con la comunidad. De igual manera existe una alta desconfianza en instituciones públicas.Existe un bajo compromiso de los entes territoriales en la gestión para el manejo de áreas protegidas.Ya se tienen todos los insumos necesarios para la elaboración del documento síntesis, esperándose tenerlo en su versión final tenerlo finalizado para octubre.Finalizar documentos de acuerdos de conservación y realizar evento de firma.

Tomando como base lo señalado anteriormente, se evidencia entonces la necesidad de garantizar la continuidad de los efectos de las zonas de protección declaradas mediante la Resolución 1987 de 2018, para de esta manera continuar protegiendo la diversidad biológica presente en dichos territorios, mientras se surte todo el proceso administrativo de declaratoria específica y definitiva por parte de las autoridades competentes. Con lo cual se espera aumentar la representatividad ecológica del Sistema Nacional de Área Protegidas-SINAP, con miras al cumplimiento de la metas AICHI, además de garantizar la protección de ecosistemas reconocidos como únicos a nivel nacional y mundial.

Teniendo en cuenta que gran parte de los procesos de declaratoria que se adelantan en las zonas de protección, por parte de las autoridades ambientales regionales, requieren la continuidad de diferentes acciones de tipo técnico, de gestión y principalmente de relacionamiento social, institucional y sectorial, se estima conveniente por parte de esta Dirección, prorrogar los efectos de la mencionada zona de protección



por un periodo de dos (2) años, para de esta forma garantizar que no se adelante la adjudicación de nuevos títulos mineros en dichas zonas, hecho que podría poner en riesgo los valores ecosistémicos y naturales de dichas áreas.

Lo anterior con el ánimo, de que a través de la declaratoria de nuevas áreas protegidas, se contribuya a aumentar la representatividad ecológica del Sistema Nacional de Área Protegidas-SINAP, con miras al cumplimiento de la metas AICHI y otras metas y compromisos nacionales e internacionales en conservación, además de garantizar la protección de ecosistemas reconocidos como únicos a nivel nacional y mundial.

3. Ámbito de aplicación y sujetos a la que va dirigida

La presente norma tendrá aplicación sobre las áreas identificadas como zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, del orden regional, declaradas mediante la Resolución 1814 de 2015 y prorrogadas mediante las Resoluciones 2157 de 2017 y 1987 de 2018.

Teniendo en cuenta los avances en la implementación de la ruta declaratoria, algunos de los polígonos correspondientes a las zonas de protección regionales han sufrido modificaciones en su diseño y extensión, correspondiendo a una reducción de la misma en todos los casos. Lo anterior en respuesta a los avances a las necesidades identificadas en el territorio y en los procesos de relacionamiento con los diferentes actores vinculados al proceso, en concordancia con los objetivos de conservación propuestos para cada caso en particular.

Así entonces y a la luz de la información entregada por las autoridades ambientales regionales y analizada en conjunto entre este Ministerio y Parques Nacionales Naturales de Colombia, las áreas de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de interés regional, sobre las cuales se espera continuar con la implementación de la ruta para la declaratoria de nuevas áreas protegidas, corresponderían a las relacionadas a continuación:

Corporación	Polígono número	Nombre del área	Fase de la ruta		Área		
			En Res. 1987/2018	Actualmente	En Res. 1987/2018	Actual	Área liberada a 2019
Corantioquia	8	Bajo Cauca_Nechi	Aprestamiento	Aprestamiento	89.181,48	89.181,48	-
Corantioquia	15	Bosque seco tropical	Aprestamiento		74.596,96	74.596,96	-
Corponor	24	Reserva Forestal Protectora Jurisdicciones	Aprestamiento		9.723,88	9.723,88	-
Corponor	37	Cerro Tasajero	Aprestamiento		5.943,17	5.943,17	-
Corponor	40	PNR Almorzadero este	Aprestamiento		31.368,23	31.368,23	-
Corporinoquia	14	Cerro Zamaricote	Aprestamiento		14.395,14	14.395,14	-
Corpourabá	23	DMRI Zona Norte	Aprestamiento		174.205,41	174.205,41	-
CDMB	46	Zona Arida Cañon Rio Chicamocha	Aprestamiento		9.730,53	9.730,53	-



Corpooración	Polígono número	Nombre del área	Fase de la ruta		Área		
			En Res. 1987/2018	Actualmente	En Res. 1987/2018	Actual	Área liberada a 2019
CDMB	47	Cañon Rio Lebrija	Aprestamiento		3.919,91	3.919,91	-
CDMB	49	Area protegida microcuenca Rio Tona	Aprestamiento		11.631,54	11.631,54	-
Codechocó	3	Relictos de Caoba de Jurado	Aprestamiento		66.954,77	66.954,77	-
Cortolima	17	Los Limones	Aprestamiento		1.457,36	1.457,36	-
Subtotal zonas de protección en fase de aprestamiento					493.108,38	493.108,38	-
Corantioquia	5	Humedal_el_Sapo 2	Declaratoria	Declaratoria	12.895,36	12.895,36	-
Corpocaldas	11	Area Corozal	Declaratoria		1.189,77	1.189,77	-
Corpourabá	22	Peque	Declaratoria		21.126,76	20.428,50	698,26
Corpourabá	21	DMRI Humedales Serrania Abibe	Declaratoria		41.732,54	41.732,54	-
CVC	54	Serrania de Los Paraguas	Declaratoria		39.901,24	39.791,78	109,46
Corponor	25	DMI Bosque Seco Tropical Sur	Aprestamiento		16.429,87	7.447,96	8.981,91
CDMB	48	Bosques El Aburrido Honduras	Declaratoria		2.112,43	2.112,43	-
Corpogujaira	41	Bahia Honda - Hondita	Declaratoria		36.695,25	36.695,25	-
Corponariño	50	Cerro Chimayoy	Declaratoria		3.287,66	3.287,66	-
Corponariño	52	Enclave suxerofitico del Patia	Declaratoria		1.309,91	1.309,91	-
Corponariño	51	Andino Pacifica	Declaratoria		19.448,57	19.448,57	-
Sub total zonas en fase de declaratoria					196.129,36	186.339,73	9.789,63
Total					689.237,74	679.448,11	19.579,27

La Resolución está dirigida al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional Minera (ANM), y debe ser aplicada por las Corporaciones Autónomas Regionales.

4. Viabilidad Jurídica.

4.1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan la competencia para la expedición del correspondiente acto.

La Constitución Política de 1991 consagra en el artículo 8° el deber del Estado y de los particulares proteger las riquezas naturales de la Nación; y determina en los artículos 79 y 80 el derecho a un ambiente sano y el deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su



desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución y además, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

El artículo 1º de la Ley 99 de 1993, en su inciso 2 establece que “La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible”

Ley 99 de 1993 adoptó los principios generales ambientales promulgados en la Declaración de Río de Janeiro, los cuales a partir de su incorporación en nuestro marco normativo tienen fuerza vinculante para el país, entre los que se encuentra el principio de precaución, desarrollado de la siguiente manera: *“la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”*

La sentencia T-154 de 2013, determinó que uno de los principios fundamentales del actual régimen constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 Const), en virtud de la cual la carta política recoge y determina, a manera de derechos colectivos, las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y la naturaleza. Estas disposiciones establecen (i) el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano; (ii) la obligación estatal y de todas las personas de proteger la diversidad e integridad del ambiente; (iii) la obligación del estado de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo sostenible; y (iv) la función ecológica de la propiedad”.

El Convenio sobre Diversidad Biológica aprobado mediante Ley 165 de 1994 en el que el País se compromete a establecer estrategias de conservación in situ de la diversidad biológica, entre las que sobresalen el establecimiento de áreas protegidas donde haya que tomar medidas especiales para su conservación, de la mano con la protección de ecosistemas, de hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones de especies en entornos naturales.⁷

La ruta para la declaratoria de áreas protegidas adoptada por este Ministerio mediante Resolución 1125 de mayo de 2015, que aplica para la declaratoria o ampliación de las áreas protegidas públicas a que hace referencia el Decreto 1076 de 2015.

La sentencia C-339 de 2002, que de manera específica se refiere al deber de las autoridades administrativas de aplicar el principio de precaución, como condición de constitucionalidad para dar aplicación al inciso 3 de la citada norma, que establece la necesidad de motivar el acto que declare las zonas de protección y

⁷ El CONPES 3680 de 2010, se definió como acción estratégica para aumentar la representatividad ecológica del sistema, la creación de áreas protegidas en los sitios prioritarios definidos por los procesos técnicos a diferentes escalas, para la identificación de vacíos de conservación y definición de prioridades.



desarrollo de los recursos naturales renovables, en estudios que determinen la incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras, como condición para excluirse o restringirse allí, trabajos y obras de exploración y explotación mineras.

La sentencia C-293 de 2002 de la Corte Constitucional, que declaró constitucional el principio de precaución contenido en la Ley 99 de 1993 y estableció que la autoridad ambiental es competente para aplicarlo, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse “un peligro de daño, que éste sea grave e irreversible, que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta, que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente”

La sentencia T-299 de 2008 de la Corte Constitucional que resaltó el “enfoque excepcional de las decisiones tomadas en virtud del principio de precaución indicando que éstas tienen siempre el carácter de provisionales, pues el enfoque de precaución no prevalece sobre la certeza científica de profundizar en las investigaciones, y no un límite a las mismas”

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, adoptado mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, plantea dentro sus bases transversales, un pacto por la sostenibilidad, denominado Producir conservando y conservar produciendo. Esta apuesta que contiene las acciones, metas e indicadores estratégicos para la gestión ambiental para el periodo 2018 - 2022, define cuatro líneas estratégicas, dentro de las cuales se encuentra la denominada “Biodiversidad y riqueza natural, activos estratégicos de la Nación”, la cual apunta a prevenir el deterioro de la biodiversidad, consolidar su conservación y en este marco generar las condiciones que permitan avanzar en su uso sostenible, aportando beneficios a las comunidades locales.

Para esto, se prevé la necesidad de generar intervenciones integrales en los territorios ambientalmente estratégicos, tales como las áreas protegidas para consolidar su protección real y efectiva y prevenir y atender los conflictos socio ambientales que puedan generarse con las comunidades locales, convirtiendo la conservación de estos espacios en oportunidades y beneficios para quienes las habitan.

Por lo anterior, se define como una acción estratégica la formulación, con una visión 2020 - 2030, de una política pública para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, que enfatice en su manejo efectivo, en la prevención y solución diferencial de los conflictos derivados del uso, ocupación, y tenencia; establezca los lineamientos para racionalizar la creación de nuevas áreas; avance en el reconocimiento de estrategias complementarias de conservación y permita alinear los instrumentos de planificación del Sistema.

El proyecto GEF para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP, previó dentro de sus resultados esperados la actualización de uno de estos instrumentos de planificación: el Plan de Acción del SINAP, instrumento que a la luz de lo planteado en el nuevo PND deberá alinearse hacia la ejecución de las acciones previstas en la Política Pública con visión 2020 - 2030, por lo que el proceso de formulación de la misma resulta estratégico para la consolidación del SINAP y para la construcción de su Plan de Acción.



Para la formulación de esta política se ha planteado una ruta metodológica compuesta por las fases de aprestamiento, diagnóstico, conceptualización y construcción.

A la fecha se han llevado a cabo las fases de aprestamiento, diagnóstico y conceptualización. Actualmente desde el proceso se viene avanzando en la estructuración de la fase de construcción y para ello se prevé el desarrollo de una serie de espacios que garanticen una participación diferencial de los actores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, conversaciones especializadas en relación con las causas identificadas, reconocimiento de visiones (regionales y sociales) y construcción escalar, de abajo hacia arriba.

Así entonces, a partir de este proceso, se contará con insumos suficientes que soporten la toma de decisiones de tipo técnico, jurídico y político, que orienten eventualmente la emisión de las normas que correspondan y que permitan fortalecer el SINAP en su conjunto.

Finalmente es preciso resaltar que con los avances en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, se aporta al cumplimiento de los compromisos que el País asumió en el marco del Convenio de Diversidad Biológica (Metas Aichi), frente a la OCDE, los acuerdos de París y las metas propuestas de Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con nuevas áreas protegidas

4.2. La vigencia de la Ley o norma reglamentada o desarrollada.

La norma por medio de la cual se prorroga el término de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, declaradas mediante la Resolución 1814 de 2015 y prorrogadas mediante las resoluciones 2157 de 2017 y 1987 de 2018, será de dos (2) años contados a partir de su fecha de expedición.

4.3. Las disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas, si alguno de estos efectos se produce con la expedición del respectivo acto.

Mediante este acto administrativo, se modifica el término de la vigencia de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, declaradas mediante la Resolución 1814 de 2015 y prorrogadas mediante las resoluciones 2157 de 2017 y 1987 de 2018, manteniendo las extensión para los siguientes polígonos:

Polígono número	Nombre del área	Corporación	Área (ha)
3	Relictos de Caoba de Jurado	Codechocó	66.954,77
5	Humedal_el_Sapo 2	Corantioquia	12.895,36
8	Bajo Cauca_Nechi	Corantioquia	89.181,48
11	Area Corozal	Corpocaldas	1.189,77
14	Cerro Zamaricote	Corporinoquia	14.395,14
15	Bosque seco tropical	Corantioquia	74.596,96
17	Los Limones	Cortolima	1.457,36
21	DMRI Humedales Serranía Abibe	Corpourabá	41.732,54
23	DMRI Zona Norte	Corpourabá	174.205,41



Polígono número	Nombre del área	Corporación	Área (ha)
24	Reserva Forestal Protectora Jurisdicciones	Corponor	9.723,88
37	Cerro Tasajero	Corponor	5.943,17
40	PNR Almorzadero este	Corponor	31.368,23
41	Bahía Honda - Hondita	Corpoguajira	36.695,25
46	Zona Arida Cañon Rio Chicamocha	CDMB	9.730,53
47	Cañon Rio Lebrija	CDMB	3.919,91
48	Bosques El Aburrido Honduras	CDMB	2.112,43
49	Área protegida microcuenca Rio Tona	CDMB	11.631,54
50	Cerro Chimayoy	Corponariño	3.287,66
51	Andino Pacifica	Corponariño	19.448,57
52	Enclave suxerofítico del Patía	Corponariño	1.309,91
Total			611.779,85

Y modificando el diseño, en términos de reducción en su extensión de los siguientes polígonos:

Polígono número	Nombre del área	Corporación	Área (ha)		
			Área Resolución 1987 de 2018	Área actual	Área liberada
22	Peque	Corpourabá	21.126,76	20.428,50	698,26
54	Serranía de Los Paraguas	CVC	39.901,24	39.791,78	109,46
25	DMI Bosque Seco Tropical Sur	Corponor	16.429,87	7.447,96	8.981,91
Total			77.457,87	67.668,24	9.789,63

El área total del área amparada bajo la resolución de prórroga, correspondería entonces a **679.448,11 ha**, cuya vigencia sería de dos (2) años contados a partir de su fecha de expedición.

5. Impacto económico, si fuere el caso, el cual deberá señalar el costo o ahorro, de la implementación del respectivo acto.

No aplica impacto económico en la implementación de esta propuesta normativa.

6. Disponibilidad presupuestal, si fuere del caso.

No aplica disponibilidad presupuestal para esta propuesta normativa

7. De ser necesario, impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación.

Con la expedición de la norma se mantiene por dos años más la medida de protección definida como zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sobre una porción del territorio nacional, en áreas de estratégica importancia ambiental (biótica, ecosistémica, social y cultural), con el fin de que todos los valores biofísicos, socioeconómicos y culturales identificados en estas áreas, puedan ser protegidos transitoriamente del otorgamiento de nuevos títulos mineros, mientras se surte todo el proceso administrativo de declaratoria específica y definitiva de dichas áreas protegidas en alguna de las categorías del SINAP, por parte de las autoridades ambientales regionales competentes.

Con lo anterior se espera aumentar la representatividad ecológica del Sistema Nacional de Área Protegidas-SINAP, con miras al cumplimiento de las metas AICHI, además de garantizar la protección de ecosistemas reconocidos como únicos a nivel nacional y mundial.



8. El cumplimiento de los requisitos de consulta y publicidad, cuando haya lugar a ello deberá anexarse la constancia que acredite que se ha cumplido dicho trámite.

Este capítulo será diligenciado en su totalidad una vez se surta la consulta pública, no obstante a continuación se relaciona la justificación que sustenta la necesidad de adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web, por un término inferior a 15 días calendario.

JUSTIFICACIÓN CONSULTA PÚBLICA

El proyecto de acto administrativo “Por medio de la cual se prorroga el término de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, declaradas mediante la Resolución 1814 de 2015 y prorrogadas mediante las Resoluciones 2157 de 2017 y 1987 de 2018 y se adoptan otras determinaciones”, amparará su publicación en un término menor al establecido, acorde con el parágrafo del artículo 2 de la Resolución No. 2046 de 2017, teniendo en cuenta que: Primero. El término que otorgó la Resolución 1987 de 2018, vence el 22 de octubre de 2019; Segundo, es un trabajo que por su complejidad ha requerido más de una prórroga, denotando con el pasar de los años, el avance de los procesos de declaratoria de áreas protegidas en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, los cuales se encuentran sujetos a lo establecido en la Resolución 1125 de 2015, mediante la cual se estableció la Ruta para la declaratoria de áreas protegidas, la cual establece la realización de acciones y procesos que demandan tiempos considerables sujetos a las dinámicas propias de cada territorio; Tercero. no se debe sacrificar la protección de la diversidad e integridad del ambiente por un término. Lo anterior, debido a que, con la prórroga se le da prevalencia al interés general y evita ceder al interés particular como es el otorgamiento de nuevos títulos mineros en estas zonas que tienen gran potencial para ser áreas de especial importancia ecológica.

Adicionalmente es importante mencionar que las áreas que entrarían en la prórroga no sufren modificaciones en sus diseños, salvo tres áreas que, conforme lo expresó la ANM en su respuesta al principio de colaboración, no presentan traslapes con áreas de interés minero, más allá de las que ya existían a la entrada en vigencia de las zonas de protección con la emisión del primer acto administrativo emitido en 2015.

9. Cualquier otro aspecto que se considere relevante o de importancia para la adopción de la decisión.

Dicha medida administrativa excepcional consiste en prorrogar por el término de dos (2) años, los efectos de la zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, en un total de 23 polígonos distribuidos en ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia para el patrimonio natural y cultural del país, con el fin de que la autoridad minera nacional no otorgue nuevas concesiones mineras, hasta tanto no se tome una decisión definitiva con respecto a su declaratoria dentro de algunas de las categorías del SINAP.

Firma: **EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS**

Cargo: Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Proyectó: Alexander Ibagón Montes / Profesional Universitario DBBSE

Revisó: Antonio José Gómez Hoyos / Coordinador (E) GGB – DBBSE



Anexo 1

Ayuda de memoria Polígono 25. Bosque Seco Tropical Sur – Corponor

A continuación se relacionan los principales aspectos relacionados con el estado actual del proceso de declaratoria del área protegida denominada. Dicha información se genera a partir de o reportado por la corporación.

Nombre del proceso actualmente (a octubre de 2019): Bosque Seco Pozo Azul

Tipo proceso: Declaratoria de una nueva área protegida

Categoría de Manejo Propuesta: Distrito Regional de Manejo Integrado

Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

Extensión Área propuesta : 5068, 57 hectáreas.

Localización geográfica: Municipios de Cúcuta y San Cayetano, Departamento Norte de Santander, Subzonas hidrográfica de los ríos Zulia y Pamplonita.

Información cartográfica: Se adjunta shape de propuesta de área para declaratoria de DRMI.

Límites geográficos: Se adjunta shape de propuesta de área para declaratoria de DRMI en sistema de coordenadas geográficas.

Fase ruta declaratoria (Resolución 1125 de 2015): Fase Declaratoria.

Requerimiento consulta previa (Ley 21 de 1991): NO.

Principio de colaboración: No se ha surtido. La categoría no excluye actividad minera y la estrategia comprende declaratoria de DRMI con áreas de títulos y solicitudes vinculadas mediante acuerdos de conservación.

Objetivos y Objetos de conservación: Aún no se tiene versión final de objetivos de conservación.

Actores estratégicos: Comunidades del corregimiento de Carmen de Tonchalá y de las veredas Ayacucho, Tabiro y Puente Zulia, Alcaldías de San Cayetano y Cúcuta, Titulares y solicitantes de polígonos de minería de Carbón, Termoeléctrica Termotasajero, Distrito de Agua Asotonchalá, CORPONOR, Gobernación de Norte de Santander, WWF.

Usos permitidos: Preservación, Restauración, Uso sostenible, Conocimiento y Disfrute.



El medio ambiente
es de todos

Minambiente

Dificultades identificadas: la figura propuesta consiste en un DRMI con polígonos internos o adyacentes de títulos /solicitudes mineras que se vincularan a la conservación mediante acuerdos.

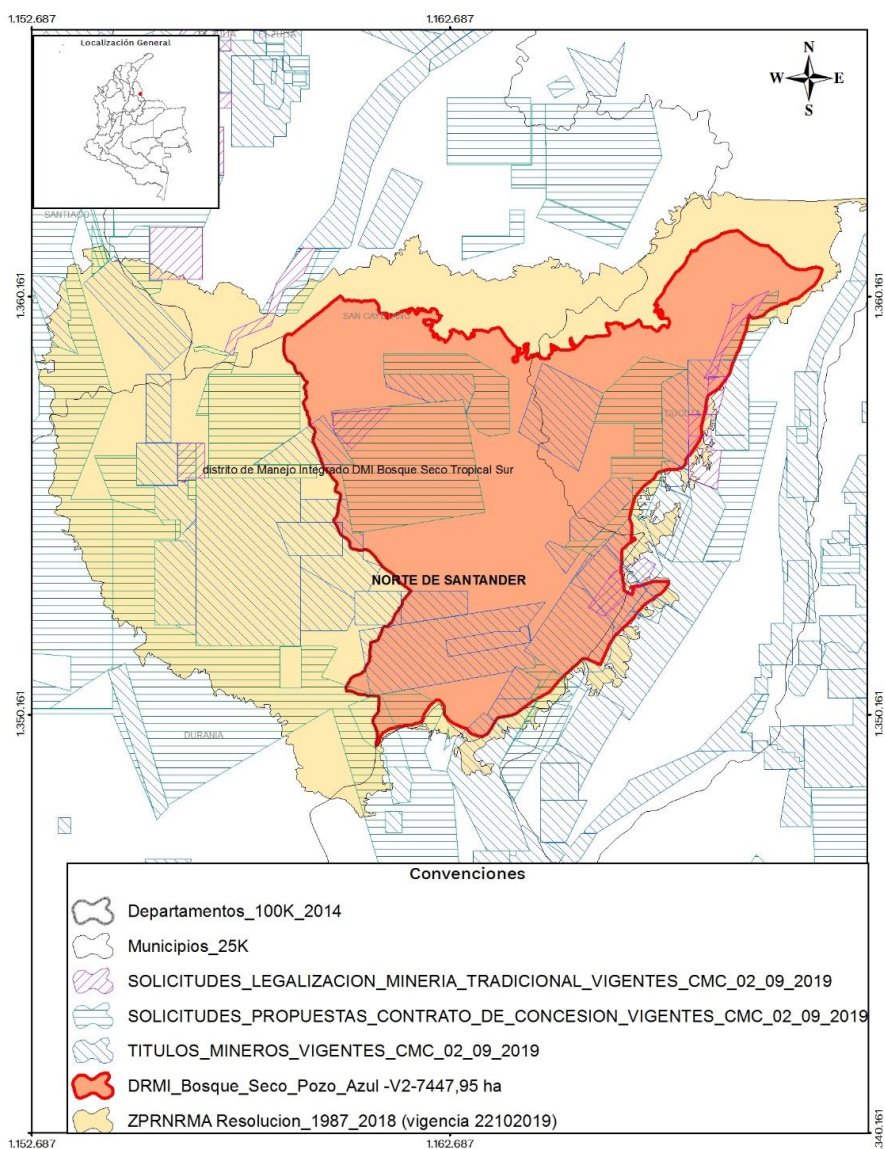
La corporación informa que ha tomado tiempo consolidar información y unificar compromisos para los mismos.

En el área existe problemática de escasez de agua que dificulta la realización de actividades en territorio pues se identifica a la corporación como responsable de la situación, lo cual dificulta comunicación con la comunidad.

A partir de la información reportada por la corporación, se identifica el siguiente estado del proceso, en términos de área y avance en la ruta:

Polígono número	Corporación	Nombre del área en la Resolución	Posible categoría	Fase de la ruta		Área 1987			Requerimiento de consulta Previa	
				A 2018 (Res. 1987/2018)	Actualmente (a octubre de 2019)	A 2018 (Res. 1987/2018)	Actualmente (a octubre de 2019)	Área liberada a 2019	SI	NO
25	Corponor	Bosque Seco Tropical Sur	DRMI	Aprestamiento	Declaratoria	16.429,87	5.067,10	11.362,77		X

De igual manera, a partir de la información cartográfica anexa por CORPONOR, el diseño actual del área a ser declarada por la corporación, corresponde como aparece relacionado a continuación:



Frente al rediseño del área a ser declarada como área protegida, la corporación informó las siguientes razones:

El límite del área contemplada en las resoluciones 1814 de 2015; 2157 de 2017 y 1987 de 2018, ha sido modificada de acuerdo a los resultados arrojados de caracterización físico biótico y social de la zona, con lo que se busca definir adecuadamente objetivos y objetos de conservación, así como propender para que la gestión en el futuro sea la más óptima.

Las modificaciones al polígono que en las resoluciones anteriores correspondía a 16.429 hectáreas y que actualmente corresponde a 7447,96 hectáreas, se ha realizado por las siguientes razones:



- *Se sacaron los sectores de los municipios de Bochalema y Santiago, por tener poca área dentro del límite, esto con el fin de que la gestión se facilite al acotarse sólo a tres municipios.*
- *Luego de verificación de cobertura del suelo, se decide sacar del límite propuesto, el territorio del municipio de Durania, pues se presenta alta intervención del bosque y predominancia de mosaicos, pastos limpios y de bosque de sombrío de café.*
- *Se realizaron recortes que permitieran sacar del área al caserío de Carmen de Tonchalá y predios aledaños en los que se asientan ocupantes y donde no se identifican áreas de bosque que puedan ser objeto de conservación.*
- *Se realizaron recortes de algunos predios de San Pedro en Cúcuta que tenían muy poca área dentro del límite.*
- *Se realizaron modificaciones acordes con áreas establecidas para expansión urbana en el POT de Cúcuta del año 2011 en el área de Carmen de Tonchalá.*
- *Se realizó recorte para exclusión del área correspondiente a la Termoeléctrica Termotasajero que en el área inicial se contemplaba.*
- *Se realizaron modificaciones acordes con sectores de corredores viales contemplados en los usos establecidos en la Revisión Ordinaria del POT de Cúcuta entregados a CORPONOR en 2019.*

Por lo anteriormente expuesto, se propone que el polígono No. 11 denominado DMI Bosque seco tropical Sur, sea incluida en la nueva resolución de prorroga como zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables, con la denominación de Bosque Seco Tropical Sur, con una extensión de 7.447,96 hectáreas. Así mismo nos permitimos informar que las áreas liberadas del polígono no presentan condiciones ecosistémicas que ameriten un proceso de conservación, así como tampoco se identifican comunidades indígenas que pretendan una ampliación de sus resguardo en estas áreas.”

Finalmente, frente a la continuación del proceso indican las siguientes acciones:

Requerimientos /Apoyo de gestión: Se relacionan más con el compromiso institucional para la posterior implementación de acciones del plan de manejo ambiental.

Pasos a seguir: Finalizar documento síntesis, para lo cual ya se tienen todos los insumos, se espera tenerlo finalizado para segunda semana de octubre. Finalizar documentos de acuerdos de conservación y realizar evento de firma.